

ENTRE LÍNEAS | En el PP, nacional y autonómico, hay bastante malestar con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Y no solo por las polémicas de su gestión o el fracaso de las tasas judiciales. *Por José Luis Valero*

El engaño de las tasas judiciales

EL ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es uno de los miembros del gabinete de Mariano Rajoy más cuestionado por los ciudadanos y por sus propios compañeros de partido, que se unen a las críticas que recibe de abogados, jueces, procuradores, funcionarios y cargos institucionales. Es de los peores valorados en las encuestas de opinión. La gestión de Gallardón no ha servido para que el PP pudiera mantener al sector más conservador de su electorado. Al contrario, ha perdido votos por su derecha y por el centro. Y eso le puede pasar factura al ministro que ha hecho añicos en solo tres años la imagen de moderado y progresista que trató de forjar en la presidencia de la Comunidad de Madrid y en la alcaldía de la capital española.

De hecho, el apoyo incondicional de Rajoy a Gallardón ya no lo es tanto y el ministro de Justicia ya está teniendo que echar marcha atrás en varios de sus proyectos estrella, empezando por el de la reforma de la ley del aborto y ya veremos

con el resto de sus polémicas medidas. Pero además, los problemas se le acumulan al titular de Justicia en varios frentes, empezando por el institucional.

Desde el principio, la aplicación de las tasas judiciales ha generado desconfianza en los ciudadanos y en la propia Administración de Justicia.

No ha mejorado el funcionamiento ni ha

aliviado cargas a los jueces, como tampoco ha servido para modernizar los servicios ni para solventar la carencia de recursos humanos y materiales ni para garantizar y financiar los servicios de justicia gratuita. Uno de los pocos argumentos que podían justificar la aplicación de las tasas.

Tanto es así, que el Gobierno aragonés PP-PAR anunció ayer que acudirá a los tribunales para que el ministro de Justicia pague los 1,2 millones de euros que adeuda a la Comunidad por el cobro de esas tasas que deberían ser para costear los servicios de justicia gratuita. Un año y medio después de la aplicación de la medida, queda claro que no se han cumplido las previsiones y que hay

motivos para desconfiar de las intenciones de Ruiz-Gallardón. Hasta el consejero de presidencia de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, admitió ayer que se siente engañado por el ministro. Y no es el único dirigente del PP que lo piensa en voz alta.

